



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Rey Martínez, Consejero
Sr. Velasco Rodríguez, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero y
Ponente

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 6 de septiembre de 2012, ha examinado el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de ssss y Dña. xxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 25 de julio de 2012 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por Dña. yyyy, en representación de ssss, y de Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en un accidente de tráfico por la irrupción de un animal en la calzada.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 27 de julio de 2012, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 482/2012, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, previa ampliación de éste, tal como dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 17/2012, de 3 de mayo. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Nalda García.

Primero.- El 17 de abril de 2012 tiene entrada en el registro de la Diputación Provincial de xxxx1 una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Dña. yyyy, en representación de ssss, y de Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en el vehículo matrícula vvvv y los daños personales sufridos



por Dña. xxxx, el 7 de noviembre de 2011, por la irrupción de un corzo en la calzada contra el que colisionó cuando circulaba por la carretera provincial xx, a la altura del kilómetro 3,00.

Acompaña a la reclamación copias de poderes notariales acreditativos de la representación, del permiso de circulación, de la tarjeta de inspección técnica, del formulario de obtención de datos en accidente con daños materiales, del informe estadístico Arena emitido por la Guardia Civil, del informe de valoración de daños, de la factura de reparación por 4.547,06 euros, del informe médico radiológico, de los partes médicos de baja, de la confirmación de incapacidad temporal y de alta, así como del documento acreditativo del pago de reparación del vehículo por la compañía aseguradora.

Solicita una indemnización de 4.547,06 euros para la compañía aseguradora y de 1.050,13 para Dña. xxxx, por 19 días improductivos.

Segundo.- Mediante Decreto de la Presidencia de la Corporación Local de 18 de abril se nombra instructora del procedimiento.

Tercero.- El 4 de mayo el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías Provinciales emite informe en el que pone de manifiesto el buen estado de conservación y señalización de la vía e indica, asimismo, que el terreno colindante con la carretera en la zona del accidente forma parte del coto privado de caza nº 10.206. Al citado informe se adjunta un reportaje fotográfico y una relación de siniestros ocurridos en la carretera provincial xx (según informe estadístico Arena elaborado por la Guardia Civil) desde el 1 de enero de 2005 hasta el 20 de abril de 2012.

Cuarto.- Concedido trámite de audiencia, no consta que durante el plazo concedido al efecto se haya presentado alegación o documentación alguna.

Quinto.- El 11 de julio de 2012 se formula la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación presentada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.



II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el apartado 3º 2. d), del Acuerdo de 31 de mayo de 2012, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Ha de ponerse de manifiesto la extraordinaria diligencia y celeridad con la que la Diputación Provincial ha tramitado el procedimiento y el cumplimiento así de modo eficaz de los principios y criterios que han de regir su actuación, recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros.

Tan sólo debe recordarse la obligación de remitir el índice numerado de documentos que conforman el expediente, tal y como exige el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 17/2012, de 3 de mayo.

3ª.- Concurren en la parte interesada los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En concreto, la legitimación de la entidad aseguradora se desprende de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, según el cual "El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización".



La competencia para resolver la reclamación corresponde al Presidente de la Diputación Provincial, sin perjuicio de la delegación del ejercicio de competencias que pueda existir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con los artículos 34.1.o), 34.2 y 35.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

La parte interesada han ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite, de forma genérica, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la reiterada doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

- a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
- b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.
- c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.



d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

En la esfera de las Administraciones Locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que "Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa". Este precepto es reproducido, prácticamente de forma literal, por el artículo 223 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios presentada por Dña. yyyy, en representación de ssss, y de Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

Conforme viene siendo doctrina constante y reiterada del Consejo de Estado, la presencia incontrolada de animales en la calzada de las carreteras constituye un factor ajeno a las exigencias de seguridad viarias, y no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público, sino como un supuesto que enerva la relación de causalidad exigible para generar la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que su acceso a la carretera puede resultar inevitable, si se tiene en cuenta las diferentes formas en que pueden acceder a la calzada (Dictámenes 1.453/1993, 1.867/1994, 1.360/1995, 1.809/1995, 1.869/1995, 2.672/1995, 2.587/1996, 2.907/1996, 3.261/2000 y 3.123/2000, de 23 de noviembre, entre otros). Este criterio es el adoptado y mantenido por este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 650/2009, 678/2009, 679/2009, 683/2009 y 686/2009).



De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los accidente de tráfico provocados por las especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente".

El artículo único, apartado veinte, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incorpora una nueva disposición adicional novena en la citada Ley, bajo la rúbrica "Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas", con arreglo a la cual:

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

»También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización".

A la vista de los datos resultantes del expediente se considera que la actuación del conductor se adecuó a las normas que regulan la utilización de los vehículos a motor en las vías públicas, así como que la Administración, por su parte, cumplió con las normas que, en relación con la conservación y señalización de la vía, le resultan exigibles.

En cuanto a la responsabilidad del titular de la vía pública, señalar que las normas establecidas por el artículo 57 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, determinan que "Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las



mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa”.

Del expediente se desprende que la carretera estaba en correctas condiciones de seguridad. Así, el informe del Ingeniero de Jefe del Servicio de Vías Provinciales indica:

“(...) el p.k.: 3+000 (...) se corresponde con tramo recto, seguido de curva izquierda, de amplia visibilidad, con arcén y cunetas limpias de vegetación (...).

»La carretera es de doble sentido, con carriles libres de 3,00 metros, es de las pocas de la red provincial con anchura de calzada de 7,00 m, donde hay línea central de separación de carriles, debidamente señalizada vertical y horizontal, existiendo en la señalización vertical señales tipo P-24 de peligro por paso de animales en libertad, que están colocadas cada tres kilómetros.

»En sentido de circulación a la xx1 (...), hasta el punto del accidente existen señales P-24 "paso de animales en libertad"; en los pp.kk. 9+480; 6+020 y 3+310. Independientemente de la señalización existente, en los pp.kk.: 9+400; 5+680 y 3+250 hay colocados además carteles reflectantes de grandes dimensiones recordando al conductor que modere la velocidad por irrupción de animales incontrolados en calzada (...).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, al tratarse de una carretera convencional, no existe obligación legal de instalar vallas en los laterales de la carretera ni se exige ningún otro tipo de diligencia adicional para la seguridad vial.

Además se señala que “De acuerdo con el Estudio para minimización de los accidentes de tráfico provocados por animales silvestres en la provincia de xxxx1, y con el Plan de actuaciones para la disminución de la accidentalidad causada por el atropello de animales silvestre, redactados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a finales del año 2.002, en



determinados tramos de las carreteras provinciales xx2 (xxxx1-xxxx2 entre pp.kk.: 0+500 al 3+500); xx (puerto xxxx3-xxxx4, entre pp.kk.: 0+000 al 5+500); xx3(xx4 en xxxx5-xxxx6, entre pp.kk.: 1+500 al 4+000); donde la siniestralidad por animales incontrolados era mayor según partes de accidentes de la Guardia Civil, en abril del año 2.003 se colocaron 22 barreras de olor, consistente cada barrera de olor en tramo de carretera de 500,00 ml., de longitud, donde se colocan estacas en ambas márgenes, separadas 10 metros con bolas o pelotas de espuma de poliuretano con concentrado de olor de animal silvestre, concentrado que se revisó a los seis meses, renovándose las deterioradas con resultados poco satisfactorios, pues el número de accidentes en los tramos donde se colocaron continuó siendo similar el número de siniestros por animales silvestres, cuando no superior”.

En relación con la última causa de atribución de responsabilidad, esto es, que se trate de un accidente “consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado”, no se ha planteado por la reclamante en ningún momento que el accidente hubiera podido ser debido a tal causa, no obstante al no ser la Diputación Provincial titular del aprovechamiento cinegético del terreno del que procedía el animal, no existe responsabilidad por dicha causa.

La carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante, de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit* y *onus probandi incumbit actori*, con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con lo que, más específicamente para el régimen de la responsabilidad objetiva de la Administración, dispone el artículo 6.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. La Administración, por su parte, debería, en su caso, probar los hechos que, desvirtúen los alegados.

En consecuencia, cumplida por la Administración su obligación de mantener la carretera en condiciones adecuadas a la circulación, dado que existe una correcta conservación y señalización de la vía, no puede considerarse probada la existencia de la relación de causalidad entre los daños causados y el funcionamiento del servicio público, razón por la que la reclamación debe desestimarse.



III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por Dña. yyyy, en representación de ssss, y de Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.